

Democracia y salud Democracy and health

Alejandro Fontenla

Profesor, Unidad Pedagógica, Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, La Plata, Argentina

¿Resulta aventurado afirmar que, en determinados períodos y bajo condiciones específicas, una política de salud puede reconfigurar a la sociedad toda? Para abordar este interrogante –salvando catástrofes sanitarias de antaño–, enfocaré diversos momentos significativos, a partir de mediados del siglo pasado.

Postrimerías de la Segunda Guerra

La década que comienza en 1940 produjo hechos intelectuales y políticos cuya influencia se extendió hasta dos décadas posteriores, llegando hasta comienzos de los años 70.

En noviembre de 1940, bajo el bombardeo que caía sobre Londres causando miles de víctimas, Winston Churchill le pidió a su ministro de finanzas, William Beveridge, que preparara un informe para paliar la desastrosa situación económica que sobrevendría al fin de la guerra. Dos años más tarde, el funcionario le presentó el notable *Informe sobre Seguridad Social y servicios conexos*.

Las propuestas del Informe Beveridge, publicado en 1942, incluían asignaciones a las personas encargadas de cuidar infantes hasta los 15 años; un servicio de salud que asegurara plenamente todos los tratamientos preventivos y curativos de toda clase a todos los ciudadanos, sin distinción, sin límite de ingresos y sin barreras económicas; y, por último, continuidad y seguridad en el trabajo.

Lo llamativo del Informe Beveridge, aprobado por un gobierno conservador e implementado por el gobierno laborista que le sucedió, fue que la solución para la sociedad toda comenzara por una ayuda universal a los necesitados. En un país capitalista comenzaba a extenderse la sociedad de la empatía.

La Segunda Guerra Mundial había puesto en evidencia el grado de barbarie, con una cifra inconcebible de sesenta millones de muertos, incluyendo las fotografías tomadas al liberar los campos de exterminio. Incluso antes de que terminara la guerra, los aliados decidieron mejorar la antigua Sociedad de las Naciones, y en 1945 dieron forma a las Naciones Unidas, que tres años después produjo la Declaración de los Derechos Humanos.

La Declaración expresó una serie de aspiraciones más que una realidad que pudiera alcanzarse fácilmente, lo cual es un tema conocido. Pero lo que aquí interesa –más allá de que, en su tercera categoría de derechos, proponía la “protección contra los efectos de enfermedad, vejez, incapacidad y desempleo; y acceso a un nivel de vida que garantice la salud y el bienestar”– es que, luego de releer las declara-

ciones anteriores –la de 1776 (Independencia de Estados Unidos) y la de 1789 (Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, París)–, la Declaración del 48 subrayó “la abolición de la tortura y del lenguaje cruel.”¹

Estas dos instancias progresivas, el Informe Beveridge (1942) y la Declaración de los Derechos Humanos (1948), fueron continuados por otros hechos trascendentes. El primero fue la serie de conferencias sobre *Ciudadanía y clase social* dictadas por Thomas Marshall en la Universidad de Cambridge en 1949, y publicadas un año más tarde. Más allá de su importancia teórica, las ideas de Marshall dotaron de anclajes institucionales a los derechos humanos proclamados un año antes.²

Para Marshall, el socialismo, en tanto profundización de la democracia, constituía un horizonte moral que impulsaba a reducir las desigualdades. Creía en “un nuevo capitalismo, con una inyección de socialismo.”

Paralelamente, la expansión generalizada del fordismo –sinónimo de mecanización, producción industrial en masa y taylorismo– y del “milagro keynesiano”, acerca de que el interés de los trabajadores se trasmutara en el interés del conjunto, produjeron por el lapso de tres décadas la merma de la desocupación y el mayor bienestar general hasta entonces conocido en democracias capitalistas³.

Alma Ata: una situación pendular

Las deliberaciones de los principales sanitaristas del mundo reunidos en Alma Ata, Kazajistán, en septiembre de 1978, constituyeron el evento internacional de políticas de salud más importante de la década del 70. Definieron a la Atención Primaria de la Salud (APS) como el más importante paradigma en las políticas de salud pública. Sus ideas centrales se relacionaron con el enfoque de derecho, la universalidad, la equidad y el protagonismo del Estado para garantizarlos, todo lo cual se concretaba en el *desideratum* “salud para todos en 2000”.

Pero la dificultad que enfrentó Alma Ata para desarrollar sus objetivos fue que, desde el punto de vista teórico, sus concepciones se nutrían del acervo acumulado desde 1940, el bagaje que configuró el Estado de Bienestar, pero su ubicación cronológica, 1978, confrontaba con el “nuevo ciclo económico” impuesto por la irrupción del neoliberalismo desde comienzos de la década.

Por esta razón, las metas de Alma Ata fueron evaluadas y reformuladas en cada fecha en la que debieran haberse cumplido: en 2000, 2007 y 2015. En cada una de esas revisiones se daba cuenta de la dificultad para lograr los objetivos propuestos, y se agregaban otros; los últimos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ponían de manifiesto la necesidad de aumentar las condiciones de apoyo político y recursos, dadas las prolongadas situaciones de inequidad que atravesaban numerosos países, incluyendo el nuestro.

¹ Pese a ser un ferviente antigremialista, Henry Ford se adelantó a su época. En 1914 redujo el horario de trabajo en la fábrica, de 9 a 8 horas. En 1926 anunció que sus fábricas estarían cerradas todos los sábados. Su razonamiento consistía en que el aumento del tiempo libre daría por resultado un crecimiento del consumo y, por lo tanto, de los viajes en coche y de los coches mismos.

La irrupción neoliberal

A mediados de la década del 70, con las grandes crisis energéticas y la competencia industrial y tecnológica de los países asiáticos, cambiaron las condiciones políticas en los países centrales y sus regiones de influencia.

Subieron aceleradamente los costos, y se produjeron fenómenos inflacionarios que los economistas de las clases dirigentes atribuyeron a dos causas: el aumento de politización y sindicalización de los mercados laborales, que impedía a las empresas ajustar costos mediante reducción de salarios, y, por otra parte, los “excesivos” gastos sociales del Estado de Bienestar, que para ellos estaban a contramano del “nuevo ciclo económico”.²

En 1975 se produce el Documento de la Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller e integrada por los más poderosos grupos económicos de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. El documento llevaba por título *La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias*.

La crisis, afirmaba, se debía a un “exceso de democracia”, que había ejercido una “influencia niveladora y homogeneizante, en detrimento de las desigualdades fundadas en la autoridad y en las distintas funciones que requiere toda organización social”.

La solución propuesta consistía en “remediar ese deterioro institucional” con fuertes políticas de ajuste.

En Europa, estas políticas tuvieron un alivio pasajero, dado el afianzamiento de algunas socialdemocracias: la derrota del tejerismo y el triunfo de Felipe González en España (1982), Francois Mitterrand gana las elecciones en Francia en 1981, Olof Palme vuelve a ser primer ministro de Suecia en 1982, y un año más tarde asume Bettino Craxi en Italia.

Para América Latina, en cambio, los paradigmas del neoliberalismo fueron devastadores, dado que para su implementación requirieron dictaduras militares sangrientas.

Cabría repasar algunas sentencias del catecismo neoliberal, que aún hoy se ven y se escuchan en los medios hegemónicos: “primero crecer, después repartir”, “el estado es el principal responsable”, “los pobres son responsables de su propia miseria”, “solo sobreviven los eficientes y emprendedores”, etcétera. Pero lo fundamental, que aquí nos interesa, es la constatación de que en todos los órdenes—económico, político y social—, el Neoliberalismo fue, fundamentalmente, un ataque a la democracia.

Políticas de salud en la pandemia

A poco de asumir su mandato, el gobierno argentino debió enfrentar la pandemia de COVID-19 que se desató en el mundo a comienzos de 2020. Con rapidez, el presidente Alberto Fernández adoptó una serie de medidas sanitarias, económicas y sociales con el fin de proteger a la población de un mal que, al momento que se inició y comenzó a extenderse, provocó una sensación generalizada de incertidumbre y temor. “Es difícil hablar —escribía el filósofo Jean-Luc Nancy—, cuando la palabra deja ver su pobreza. Hoy, toda palabra, ya sea tecnocientífica, política, filosófica o moral, muestra su debilidad. No hay saber garantizado, ni programa de acción o de pensamiento disponible. No hay afirmación de solidaridad que no tropiece con las necesidades de guardar distancias, ni afirmación de universalidad que no deba tener en cuenta grandes diferencias locales. No hay visión del mundo porque no hay un mundo visible, ni tampoco perspectiva de porvenir porque no se sabe cómo puede evolucionar la pandemia”.⁴

A la fecha de hoy, los datos y registros estadísticos, las medidas adoptadas y los resultados alcanzados son de dominio público. No me detendré en las medidas económicas de emergencia (emisión monetaria; subsidios a personas

y empresas; bolsones de alimentos; tarjetas alimentarias; prohibición de despidos, desalojos y corte de servicios públicos; créditos; desgravaciones impositivas; etc.), ni en la decisiva reforma del sistema de salud argentino, que aumentó en más del 40% la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, lo cual implicó sumar camas, recurso humano capacitado y equipamiento para brindar atención a los pacientes críticos.

Menciono al pasar que el país efectuó la construcción de doce hospitales modulares en distintas jurisdicciones, se abocó a reformular y fomentar la elaboración local de equipos de protección personal y respiradores, que también desarrolló innovaciones tecnológicas y científicas.

Un párrafo aparte —entiéndase que busco subrayar solo cuestiones específicas— merece la exitosa gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y la participación activa de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara.

Hasta el 25 de abril de 2022, se contabiliza la cifra de 9 060 923 casos confirmados, 128 344 fallecidos y 8 895 999 recuperados de la infección por el virus; un resultado “exitoso”, si se compara, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica. La gestión sanitaria de la pandemia, aun con los costos que debió pagar, cumplió el objetivo de proteger a la población en el mayor grado posible.

Sin embargo, quiero referirme a dos acciones importantes y benéficas que desataron, pese a ellas, violentas reacciones: las medidas de cuarentena y aislamiento social, y las campañas de vacunación.

Los límites de la empatía

Responder a la emergencia de la pandemia provocó, por lo menos en la Argentina, una política de salud que reconfiguró a gran parte de la sociedad. La enfermedad dejó de ser solo un sufrimiento individual y privado para convertirse en algo concerniente a todos, un hecho comunitario y político.

Las medidas sanitarias implementadas por el gobierno confrontaron de inmediato con una oposición política obstructionista en términos absolutos, que consideró a las indicaciones de aislamiento social como un “encierro” y una privación de la libertad. Cuestionaron también la inmunidad de las vacunas, llegando a denunciarlas como un “veneno”. Reivindicaron, en cambio, estrategias de inmunización colectiva, y habrían preferido dejar que murieran personas cuyo fin no estaría muy lejano. La endeblez conceptual de estos argumentos —que además fueron acompañados con acciones provocadoras, como quema de barbijos en las plazas— no merece discutirse.

Lo destacable es que el negacionismo delirante de la oposición política en la Argentina se correspondió con lo que en el plano internacional era el avance de las extremas derechas totalitarias, y que, como ellas, tuvo también una base de consenso: lo que en términos generales se llamó “la insatisfacción de la democracia”. Ese discurso apocalíptico y violento buscaba captar a los jóvenes carentes de conciencia histórica y abrumados por la falta de horizontes, y también a los adultos presos de la situación económica que arrastraba una larga regresión en términos de bienestar.

Los “viejos” neoliberales de los setenta, que agredieron a la democracia, escribieron libros, intentaron fundamentaciones, recuperaron (aunque sesgada e intencionadamente) las ideas de Schumpeter, pagaron a intelectuales mercenarios para que escriban volúmenes sobre “el fin de la historia” o “el pensamiento único”. En la Argentina de hoy, los nuevos “libertarios”, junto a otros sectores de la derecha, gozando de la impunidad judicial con que cuentan, pasaron rápidamente a la violencia, inclusive proyectando y financiando un intento de magnicidio. Puestos en campaña electoral, sus posiciones insolidarias, productadura, antiobreros, antide-

rechos humanos, antifeministas y antiapertura de derechos en general, preanuncian una sociedad de tensiones extremas y violencia generalizada.

¿Qué opiniones generales surgen como reparo ante un contexto en el que gravita tanta fuerza negativa? El sociólogo Jorge Aleman sostiene que "ahora más que nunca, habría que proteger a la democracia del rechazo a la política que las derechas neofascistas promueven". La investigadora británica Lynn Hunt, a quien hemos seguido en este artículo, se pregunta: "¿Qué conclusión hemos de sacar del

resurgir de la tortura y la limpieza étnica, de la persistencia de la violación y la opresión de las mujeres, y la proliferación del narcotráfico?" Y se responde: "la empatía no está agotada, como han afirmado algunos. Se ha convertido en una fuerza beneficiosa, más potente que nunca. Pero el efecto opuesto, causado por la violencia, el dolor y la dominación, también es mayor que nunca. Los derechos humanos son el único baluarte que tenemos en común contra esos males". Por estos, y otros argumentos concurrentes, quisiera compartir ese optimismo.

El autor no manifiesta conflictos de interés.

• Bibliografía

1. Hunt L. La invención de los derechos humanos. Barcelona: Tusquets; 2007.
2. Nun J. Democracia gobierno del pueblo o gobierno de los políticos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 2000.
3. Rybczynski W. Esperando el fin de semana. Barcelona: Emecé; 1992.
4. Nancy JL. Un virus demasiado humano. Buenos Aires: Ediciones La Cebra; 2020.